

1985: UN MAL AÑO EN UNA ÉPOCA DIFÍCIL

LORENZO MEYER
El Colegio de México

El contexto

ENTRE LOS OBSERVADORES de la relación mexicano-americana a ambos lados del río Bravo parece haber consenso en un punto: 1985 fue un año malo, sobre todo por lo que se refiere a la forma de la relación. Y tratándose de las relaciones con Estados Unidos, la forma es, para México, casi tan importante como el contenido. En esto no hay ningún elemento de sorpresa; las dificultades en la relación bilateral de México con Estados Unidos se inscribieron en un contexto de diferencias y tensiones entre los dos países que arranca, en el corto plazo, de fines del decenio pasado.

El marco inmediato de la relación mexicano-norteamericana en 1985 lo dieron, básicamente, dos hechos: el triunfo rotundo de Ronald Reagan en las elecciones de 1984 en los Estados Unidos y la imposibilidad, en México, de superar la crisis económica según lo previsto en los planes originales del gobierno.

El 6 de noviembre de 1984 Ronald Reagan fue reelecto presidente de los Estados Unidos para un segundo y último periodo. El margen de su victoria fue holgado: recibió el 59% de los 92 millones de votos emitidos. Entre los blancos —el grupo más influyente en asuntos externos por su posición en la estructura del poder— el presidente contó con un respaldo aún mayor: el 70%. Estos electores apoyaron, sobre varias otras cosas, la continuación de una política exterior firme y sin concesiones frente al principal rival de Estados Unidos, la Unión Soviética, y frente a todos aquellos países o fuerzas internas o externas que se opusieran al proyecto global de Estados Unidos de superioridad sobre sus adversarios. Así pues, a partir de esta victoria electoral, se hizo más claro, si cabe, el proyecto norteamericano de lograr la superioridad militar sobre la Unión Soviética mediante la construcción de un sistema defensivo que lo haga inmune a los efectos de un primer ataque o de una represalia atómica soviética.

Las repercusiones de esta política de reestructuración del equilibrio nuclear y de nacionalismo agresivo, se dejaron sentir en el ámbito general

de la relación de Estados Unidos con el mundo entero, incluido México. De manera directa e indirecta, en 1985 las autoridades de Washington hicieron saber al gobierno mexicano que el margen de tolerancia que estaban dispuestas a aceptar ante las diferencias de opinión entre los dos países, tanto en asuntos mundiales como en los bilaterales, se había estrechado. La voluntad hegemónica de Estados Unidos en América Latina restó viabilidad al proyecto mexicano de mantener —y ensanchar— el margen de independencia relativa frente a su vecino del norte.

La vulnerabilidad mexicana frente a los Estados Unidos en 1985 tuvo dos facetas, ninguna de ellas nueva. Por un lado, la estructural, es decir, aquella producto de la diferencia histórica entre las economías de los dos países, diferencia que se puede resumir señalando que el Producto Interno Bruto (PIB) norteamericano es aproximadamente quince veces superior al de México. Por el otro, la coyuntural que surgió a raíz de la crisis de la economía mexicana iniciada en 1982 y que en 1985 se ahondó sin dar señales de un fin próximo. En torno a la primera faceta, no tiene caso ahondar en este ensayo pues es de sobra conocida y permanentemente, más que una variable se trata de una constante. Para nuestro propósito, lo que conviene resaltar son ciertos aspectos de la vulnerabilidad coyuntural.

En 1985, la deuda externa llegó a los 96 mil millones de dólares y el país debió entregar a sus acreedores internacionales y nada más por concepto de intereses, alrededor del 32% del valor de sus exportaciones. La inflación resultó más alta de lo previsto (más del 60%) y la devaluación del peso frente al dólar fue también más espectacular de lo que se había pensado (de 200 pesos por dólar en enero se pasó a 310 a mediados de año para cerrar a 480). En fin, en 1985 la economía creció al 2.7%, pero tal crecimiento se concentró en el primer semestre y, al concluir el año, los observadores pronosticaron para el siguiente una caída real del PIB de poco más del 2%. En resumen: los objetivos iniciales del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, que eran lograr un crecimiento sostenido del PIB de entre el 5 y 6% en el periodo 1986-1988, simplemente resultarán imposibles de alcanzar, lo que afectó negativamente la percepción que, desde la sociedad, se tenía sobre el gobierno y el régimen.

Un aumento de las importaciones en 1985 —21.7% más que en 1984— aunado a una baja en los ingresos de divisas —el valor del petróleo exportado disminuyó 12.7%, el de los productos agropecuarios 20.3%, el de los minerales 6.3% y el de las manufacturas 7.9%— causaron un serio daño a las reservas en dólares del país. La caída del precio internacional del petróleo, la principal exportación mexicana, tuvo efectos muy dañinos. Esta caída se inició en febrero y se aceleró al fin de año. Para 1986 el panorama se presentaba desolador. Por falta de ajuste rápido en los precios del combustible mexicano respecto del mercado mundial, entre mayo y junio de 1985 PEMEX se encontró exportando menos de un millón de barriles diarios, cifra muy por debajo del millón y medio que se suponía era la meta esperada y deseable. En la segunda mitad del año se recuperó el volumen de las exportaciones pero no los ingresos. En promedio, el barril de crudo “maya” se vendió en 1985 a 1.16 dólares menos que el año anterior;

la baja del tipo “itsmo” fue de 1.75 dólares. Para el inicio de 1986 el precio había caído por debajo de los 20 dólares por barril.

Ante el deterioro de la capacidad de pago de México, la Secretaría de Hacienda negoció en marzo de 1985 la firma de un acuerdo con los representantes de poco más de 500 bancos extranjeros, que controlaban el grueso de la deuda externa mexicana. En virtud de este acuerdo, México pudo diferir el pago de la mitad de su deuda externa (48.7 miles de millones de dólares) a catorce años en vez de ocho. De todas formas, la continua baja en las reservas de divisas de México fue de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a posponer un pago por 950 millones de dólares ya programado y que debería haberse efectuado entre octubre y diciembre de 1985.

Las dificultades crecientes de México para hacer frente a su deuda externa, así como la necesidad de contar con nuevas líneas de crédito internacional por alrededor de cuatro mil millones de dólares colocaron al gobierno de Miguel de la Madrid en una posición muy difícil. Al finalizar 1985 la posibilidad de una moratoria en el pago de la deuda externa mexicana era cada vez más real. Fue en este marco de grandes dificultades económicas internas, que tuvieron claras expresiones políticas, que se dio la relación de México con Estados Unidos.

Centroamérica y Naciones Unidas, dos arenas multilaterales con problemas

En 1985, la pugna entre el gobierno sandinista de Nicaragua y los Estados Unidos aunada a la persistencia de la acción guerrillera en El Salvador, siguió siendo el eje alrededor del cual giró la confrontación Este-Oeste en América Latina. La determinación norteamericana por evitar una solución negociada a la guerra civil salvadoreña que diera una participación, por mínima que fuera, en el gobierno de ese país al FMLN, y su aún más clara determinación de obligar a los sandinistas a negociar un acuerdo de participación política con las fuerzas contrarrevolucionarias, como condición necesaria para dejar de hostilizar al régimen nicaragüense y ejercer presión, hicieron que Washington siguiera sin mostrar ningún interés real por la vía propuesta por México y los otros países latinoamericanos miembros del llamado “Grupo de Contadora”, formado en enero de 1983 por México, Venezuela, Colombia y Panamá con el propósito de servir de intermediario para alcanzar la paz entre los países de Centroamérica, teniendo como base los principios de no intervención y respeto a la soberanía nacional.

El Acta de Paz de Contadora —documento elaborado con muchos trabajos en 1984— requería de los gobernantes nicaragüenses un compromiso claro de no apoyar más a la guerrilla salvadoreña o de cualquier otro país de la región, pero igualmente necesitaba de una aceptación por parte de Estados Unidos y sus aliados centroamericanos de poner fin a la ayuda que abiertamente daban a los contrarrevolucionarios nicaragüenses, firmemente establecidos en sus bases de Honduras y Costa Rica. En el fondo, el proyecto de Contadora equivalía a garantizar la supervivencia del sandinismo —respeto al principio de la soberanía nacional— a cambio de que debili-

tara sus vínculos con Cuba y la URSS y aceptara dejar de otorgar cualquier tipo de apoyo a los rebeldes salvadoreños del FMLN. Estados Unidos simplemente no se mostró interesado en ese tipo de solución, pues consideró que el tiempo estaba de su parte en la guerra civil salvadoreña y que, por tanto, no tenía por qué resignarse a aceptar la consolidación y permanencia del régimen revolucionario de Nicaragua, cada vez más identificado con un proyecto interno de corte socialista y poco dispuesto a romper por completo con Cuba y la Unión Soviética. Dentro de este esquema, Contadora y su insistencia en el respeto al principio de no intervención, resultó para la administración de Reagan más un problema que una solución, aunque los voceros de la política exterior de Washington siempre tuvieron cuidado de no negar por completo la legitimidad en que se basaba el esfuerzo del grupo latinoamericano. Para fines de 1985 las negociaciones que había llevado a cabo el Grupo Contadora entre las partes en conflicto en Centroamérica habían entrado en un período de receso al fallar el intento por lograr la firma de Nicaragua del Acta de Paz, acta que se había vuelto a redactar tras el rechazo de la versión original por parte de Honduras, Costa Rica y El Salvador en 1984. Al final de 1985, los países del Grupo Contadora y sus apoyos confiaban en que las elecciones en varios países centroamericanos —Guatemala, Honduras y Costa Rica— abrieran nuevos espacios de negociación, aunque las perspectivas no eran buenas pues las posibilidades de que Estados Unidos, el poder hegemónico de la región, modificara su posición eran casi nulas.

La relativa ineffectividad de Contadora en 1985, aunada a la inviabilidad de las pláticas directas entre Estados Unidos y Nicaragua que México continuó auspiciando en Manzanillo, Colima —pláticas suspendidas unilateralmente, aunque de manera “temporal”, por Estados Unidos en enero de 1985— dejaron en un callejón muy estrecho a la política mexicana en Centroamérica. Contadora, en sus inicios, había sido una alternativa a la estrecha relación bilateral que el gobierno de José López Portillo había establecido con Nicaragua y que había causado serios problemas a México con Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Sin embargo, para fines de 1985 era obvio que Contadora había perdido efectividad. Por otro lado, la “tercera opción”, desentenderse del problema centroamericano y concentrarse en la relación con Guatemala —donde un civil, Vinicio Cerezo, había ganado las elecciones— no se podía hacer sin pagar un precio: la vulnerabilidad del principio toral de la política interamericana tradicional de México: la defensa de la no intervención.

El 4 de abril de 1985, el presidente Reagan presentó su llamada “Iniciativa de Paz” para Centroamérica. En virtud de tal propuesta, el gobierno norteamericano ofrecía al de Nicaragua no otorgar ayuda militar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses (aunque continuaría apoyándolos con ayuda “humanitaria”), pero siempre y cuando el gobierno sandinista aceptara detener sus operaciones contrainsurgentes y negociara un arreglo político con sus enemigos. La propuesta del presidente estadounidense no tuvo como destinatario real al gobierno de Managua —de antemano se esperaba su rechazo— sino al Congreso de Estados Unidos, pues la iniciativa buscaba presentar a los sandinistas como intransigentes y facilitar así a los congre-

istas que votaran en favor de otorgar abiertamente ayuda a los contrarrevolucionarios —simbólicos catorce millones de dólares—, lo que equivaldría a avalar la política de presión abierta y creciente contra el sandinismo.

Como parte de la política general de apoyo a los movimientos insurgentes anticomunistas en América Latina, Asia y África, el presidente Reagan presionó a sus colegas mexicano y colombiano para que se declararan públicamente en favor de su Iniciativa de Paz, lo que puso en una situación muy difícil a México y a Colombia. El rechazar abiertamente la demanda de Reagan —que incluyó una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos a Miguel de la Madrid así como la visita de un enviado especial estadounidense el 9 de abril habría creado una tensión más en la relación mexicano-norteamericana. Sin embargo, aceptar la iniciativa hubiera sido admitir y legitimar el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos de un país latinoamericano al dictar las condiciones de la naturaleza del equilibrio interno de fuerzas. La respuesta mexicana fue lo más ambigua y menos comprometedor posible y constituyó un rechazo implícito a la posición estadounidense. En efecto, De la Madrid respondió al presidente de Estados Unidos que el diálogo entre los grupos de cada país centroamericano era benéfico, pero que pronunciarse en torno al mismo escapaba a la actuación del Grupo Contadora, puesto que su principio básico es el de la no intervención en los asuntos internos. En cualquier caso, el incidente sirvió para resaltar una vez más lo estrecho de los márgenes de maniobra mexicanos frente a una diferencia sustantiva con Washington.

Al concluir 1985, en México y en los estados Unidos se daban los últimos toques a los preparativos para la tercera reunión el 3 de enero de 1986 de los presidentes de México y Estados Unidos. Si bien este encuentro ya no tuvo lugar en 1985, en realidad cerró el cúmulo de procesos que se desarrollaron a partir de la reunión anterior de los mandatarios en 1984.

En Mexicali, tanto Estados Unidos como México pusieron especial cuidado en disminuir las referencias al tema centroamericano para poder subrayar las coincidencias y el lado positivo de su relación. Como ejemplo de lo constructivo de esta relación, Estados Unidos ofreció su apoyo para que México pudiera obtener créditos externos frescos por 4 mil millones de dólares. Sin embargo, apenas concluida la reunión, el presidente de Estados Unidos hizo una declaración pública reafirmando el propósito y derecho norteamericanos de seguir apoyando a los contrarrevolucionarios nicaragüenses, quienes, desde la perspectiva oficial de Washington, no eran contrarrevolucionarios sino “luchadores de la libertad”. Así pues, las diferencias entre México y los Estados Unidos respecto al complicado problema nicaragüense siguieron tan irreductibles al iniciarse 1986 como lo habían sido al principiar 1985.

La actuación del Grupo de Contadora fue el principal, pero no el único, foco de tensión entre México y Estados Unidos en el ámbito de las relaciones multilaterales. En las Naciones Unidas, por ejemplo, la delegación mexicana asumió posiciones o hizo declaraciones de carácter tercermundista, que fueron consideradas con desagrado por el Departamento de Estado. Una muestra de este conflicto tuvo lugar cuando en mayo de 1985 el delegado mexicano ante la ONU declaró que el boicot económico que los

Estados Unidos habían impuesto contra Nicaragua, vulneraba el orden jurídico internacional y atentaba contra el derecho a la autodeterminación. El cambio del jefe de la misión de México ante Naciones Unidas a fines de 1985, fue interpretado por algunos observadores como un esfuerzo mexicano por disminuir los focos de tensión secundaria con Estados Unidos.

La relación bilateral: el choque simbólico

Las relaciones políticas bilaterales entre México y Estados Unidos se vieron notoriamente deterioradas cuando apenas se iniciaba el año. El motivo fue un incidente inesperado, pero que de inmediato fue usado por las autoridades de Estados Unidos para expresar su descontento en torno a ciertas políticas mexicanas. El 7 de febrero Enrique Camarena, un agente comisionado en México por la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos, agencia dependiente de la oficina del Procurador General, fue secuestrado en Guadalajara mientras investigaba el tráfico de drogas en la costa occidental de México y posteriormente fue asesinado.

El "Caso Camarena" dio pie a que, con el consentimiento tácito de sus superiores, varios funcionarios menores del gobierno de Estados Unidos se transformaran, por un momento, en formuladores de la política estadounidense hacia México. La vida en la frontera norte de México se transformó de arriba a abajo al echar a andar por primera vez desde fines de los sesenta, una "Operación Intercepción" el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Supuestamente el objetivo de detener para inspeccionar minuciosamente a cientos de miles de autos que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos era dar con Camarena y sus secuestradores, justificación que nadie creyó por ilógica. Resultó obvio que la meta real era desalentar la visita de norteamericanos a México como una forma de presionar al gobierno mexicano a cooperar más activa y eficientemente con las autoridades del país vecino en materia de drogas. Las declaraciones de los directivos de la DEA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos a la prensa y la televisión nacional e internacional, fueron una andanada de acusaciones directas en contra de la ineficacia y corrupción de las autoridades mexicanas.

Los medios masivos de comunicación de Estados Unidos y, en menor medida de Europa, presentaron a sus lectores y televidentes decenas de artículos y programas que subrayaban la enorme corrupción de la policía, del aparato judicial mexicano e incluso del ejército. El *New York Times*, por ejemplo, entre el 21 de febrero y el 13 de abril dedicó 34 artículos al tema. En tono menor, pero no por ello menos dañina, también se desató una ola de noticias en torno a la inseguridad de los viajeros norteamericanos en las carreteras de México. El gobierno de Estados Unidos jugó con la idea de hacer oficial la advertencia a los turistas que se internaron en México de que su seguridad corría peligro. De esta manera indirecta pero efectiva, el gobierno y los medios de comunicación de Estados Unidos pusieron en tela de juicio la política de "renovación moral" de Miguel de la Madrid e incluso la legitimidad de su gobierno y del régimen. Desde la perspectiva

estadunidense, el interés nacional de Estados Unidos requería al sur de su frontera un vecino que no obstaculizara su acción internacional y que, en cambio, contara con un gobierno eficiente, predecible y legítimo.

Sólo la captura, en abril, de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo —miembros prominentes de la gran mafia que controla la producción de drogas en México y responsables del asesinato de Camarena— así como el arresto de algunos policías y el cese de otros más, disminuyó el caudal de noticias negativas sobre México en la prensa internacional. Una serie de entrevistas entre los procuradores generales de México y Estados Unidos así como entre los cancilleres de ambos países, pareció poner punto final a la tensión provocada por el caso Camarena. De todas formas, en lo que restó del año y de tarde en tarde, el embajador y la prensa de Estados Unidos se encargaron de recordar públicamente que el gobierno de México seguía en el banquillo de los acusados por lo que al problema de la droga —y de la corrupción— se refería.

Las elecciones legislativas mexicanas de mediados de año también resultaron ser otro inesperado motivo de irritación en la relación mexicano-norteamericana. En efecto, las elecciones de julio dieron pie para que, dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos, se especulara en torno a la erosión de la legitimidad del régimen mexicano y la necesidad de apoyar una reforma que lo alejara de su naturaleza autoritaria para mantener su viabilidad en un contexto de creciente pluralidad social. De hecho, aunque no formalmente, la política interna de México se convirtió en parte sustantiva de una agenda no oficial pero real entre México y los Estados Unidos.

Desde el inicio de 1985, la prensa de Estados Unidos dejó saber a sus lectores que, de haber un fraude masivo en las elecciones legislativas de julio, podría surgir la violencia social en México como única vía de alcanzar la democracia. Esta posibilidad se hizo más verosímil a raíz de las violentas manifestaciones de los panistas en Piedras Negras, que al principiar el año protestaron por un supuesto fraude local. En los círculos oficiales de Washington se empezó a especular, aunque de manera discreta y privada, en torno a la viabilidad del monopolio del poder mantenido por más de medio siglo por el PRI.

La suposición de que era posible una victoria sustantiva de la oposición conservadora, particularmente en Sonora, así como la amenaza de violencia si tal victoria no era reconocida, llevó a los medios masivos de comunicación de Estados Unidos a subrayar la erosión en la legitimidad del régimen político mexicano por su incapacidad y corrupción, así como la posibilidad de un cambio político histórico al sur del Río Bravo: el principio del fin del dominio del PRI, principalmente en el norte de México. El hecho de que tal cambio estuviera encabezado por una fuerza conservadora como el PAN, que se mostraba más cercana que el PRI a la filosofía política y económica dominante en Estados Unidos, hizo que la posibilidad del cambio no inquietara mucho a quienes, desde dentro o fuera del gobierno norteamericano, seguían el curso de los acontecimientos en México. Para algunos analistas de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, un aumento en el pluralismo político de México, sobre todo si era de signo conservador, sería útil al interés nacional de ese país.

La victoria oficial aplastante del PRI en las elecciones de julio, así como los pormenorizados reportajes de un par de centenares de corresponsales extranjeros sobre instancias de fraude abierto del PRI en contra del PAN, hicieron que la prensa de Estados Unidos —y también la europea— restara legitimidad al proceso electoral mexicano, y que de paso dejara en claro que, ante la fuerza de la evidencia difícilmente se podía catalogar al mexicano entre los sistemas democráticos de Occidente.

Los voceros oficiosos del gobierno mexicano consideraron que el interés desusado que los reporteros norteamericanos habían mostrado en relación al proceso electoral de mediados de 1985 —en particular en Sonora— no era una mera coincidencia, sino que el gobierno de Washington estaba tratando de construir una agenda no oficial con México, para presionarlo. La opinión generalizada entre estos exponentes del sentir oficial mexicano, era que la cobertura dada a las fallas del sistema electoral mexicano —fallas que siempre habían existido— era parte central de una campaña, orquestada desde los altos niveles del gobierno de los Estados Unidos, para desacreditar internacionalmente al régimen mexicano y minar la posición de México dentro del complejo contexto internacional en general y de la crisis centroamericana en particular. Según este razonamiento, la pérdida de legitimidad internacional de los procedimientos electorales mexicanos buscaba restar al gobierno de México la capacidad de pronunciarse sobre la naturaleza democrática o no democrática de los gobiernos de Centroamérica.

Está por demás aclarar que hasta hoy no contamos con ninguna prueba de que efectivamente hubiera habido una acción premeditada de las autoridades de Estados Unidos para influir sobre la prensa de su país y la internacional en contra del gobierno de Miguel de la Madrid. Hay poca duda, sin embargo, de que entre los círculos conservadores norteamericanos, disgustados con las políticas externa e interna del gobierno mexicano, la mala prensa que las autoridades mexicanas tuvieron a mediados de 1985 fue motivo de satisfacción, pues las puso a la defensiva.

Lo verdaderamente importante

Pese a lo espectacular de algunas de las tensiones que tuvieron lugar en 1985 entre México y Estados Unidos, conviene no perder de vista que en el área donde México estaba más vulnerable —la economía— Estados Unidos actuó de manera distinta, con gran cautela. El tema de la relación económica se vio relativamente aislado de aquellos en que las diferencias entre los dos países se hicieron públicas.

En el centro de la relación económica entre México y los Estados Unidos se encontró el problema de la deuda externa mexicana de 96 mil millones de dólares. A lo largo del año hubo voces dentro de México que propusieron, desde una perspectiva económica y política tanto como ética, la necesidad de declararse en moratoria, suspender el pago de intereses y usar el total de los recursos generados por las exportaciones para devolver a la economía su capacidad de crecimiento.

Los círculos gubernamentales mexicanos aprovecharon estas deman-

das radicales, para hacer resaltar ante los círculos financieros internacionales lo responsable —y difícil— de su propósito de seguir cumpliendo con el pago de la deuda, pero a la vez, y como contrapartida, dejaron saber que era urgente llegar a un arreglo que otorgara a México intereses más bajos y plazos de pago más largos. En la reunión de Mexicali del 3 de enero de 1986 entre Ronald Reagan y Miguel de la Madrid, México recibió el reconocimiento por su esfuerzo para reordenar su economía y mantener sus compromisos internacionales; a cambio, Estados Unidos dio una cierta promesa de apoyo a las peticiones mexicanas de crédito. México buscaba una respuesta más concreta, pero no la hubo.

Hay razones que permiten explicar la prudencia con que Estados Unidos actuó en 1985 con relación a la deuda mexicana. En primer lugar, presionar económicamente a México lo hubiera podido llevar a la moratoria de pagos, situación que afectaría inmediata y gravemente a algunos de los grandes bancos estadounidenses que tienen en sus carteras una parte sustantiva de los préstamos hechos a México. Si estos bancos se vieran en dificultades por tener que cancelar su cartera mexicana, el sistema bancario de Estados Unidos en su conjunto se vería afectado adversamente, sobre todo si el ejemplo mexicano fuera seguido por otros de los grandes deudores.

La posibilidad de una moratoria en el pago de la deuda externa mexicana, no sólo representó una amenaza potencial para el sistema bancario estadounidense e internacional, sino que una reacción punitiva internacional en contra de tal medida afectaría su estabilidad al hacer aún más grave la crisis económica. En efecto, y como ya se señaló, el interés nacional de Estados Unidos frente a México requiere del mantenimiento de la estabilidad y predictibilidad de los procesos políticos mexicanos. Ésta es, quizá, la razón política de fondo que explica que las dificultades económicas de México en 1985 no fueran empleadas por Estados Unidos para presionar a la administración de Miguel de la Madrid de la misma manera que lo fueron las situaciones embarazosas, pero de efectos menos sustantivos y pasajeros, del narcotráfico o las elecciones.

Al finalizar 1985, la comunidad financiera internacional parecía coincidir, al menos parcialmente, con la posición de gobiernos de países deudores como el mexicano. Desde ambas perspectivas resultaba obvio que para no caer en una serie de quiebras y moratorias era necesario politizar la deuda. Esto significaría, entre otras cosas, hacer intervenir al gobierno de Estados Unidos así como a los de Europa Occidental y Japón, para que crearan un mecanismo que facilitara créditos blandos a los deudores o aceptara hacerse cargo de la deuda externa de los países del Tercer Mundo, de tal manera que se liberara a los bancos privados de una cartera de alto riesgo.

Una primera respuesta, aunque insuficiente, a la demanda de politizar la deuda, ocurrió a fines de 1985 cuando se dio a conocer el llamado "Plan Baker", elaborado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos James Baker, y cuyo objetivo era facilitar crédito hasta por 20 mil millones de dólares en un período de tres años para que reactivaran sus economías un grupo de países subdesarrollados abrumados por el peso de las deudas. Al finalizar 1985 este plan era aún un mero proyecto que intentaba, a cambio

de ayuda, imponer una serie de condiciones a los beneficiarios, entre ellas la disminución del gasto público y lineamientos de política económica que favorecieran la liberación del comercio y la inversión privada —nacional y extranjera— frente a la pública.

Aunque el tema de la deuda acaparó buena parte de la atención de las autoridades de México y los Estados Unidos en torno a la relación económica de ambos países, ello no significó en modo alguno que la agenda económica bilateral quedara agotada ahí. Como es obvio, también estuvieron los viejos problemas del comercio y la inversión directa.

Por lo que hace al comercio, el problema más apremiante —y que venía de tiempo atrás— siguió siendo el de las acusaciones sistemáticas que productores de Estados Unidos hacían en contra de sus competidores mexicanos, acusándolos de exportar productos subsidiados. Las posibilidades mexicanas de defensa frente a los cargos de competencia desleal eran relativamente pocas, pues por no pertenecer México al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT) y por no tener acuerdo comercial con su vecino del norte, el Departamento de Comercio de Estados Unidos no podía otorgar a México la ventaja de la “prueba del daño”, es decir, exigir a quienes esgrimieran el argumento de que la competencia desleal dañaba sus intereses, que lo probaran antes de proceder a disminuir o cerrar el mercado norteamericano a los productores mexicanos.

En abril de 1985 México y Estados Unidos lograron la firma de un acuerdo ejecutivo (Executive Agreement) sobre subsidios. En virtud de este acuerdo, México se comprometió a no subsidiar los insumos empleados por los fabricantes mexicanos en sus exportaciones al país del norte y a cambio, las autoridades de Estados Unidos otorgaron a México el beneficio de la tan buscada prueba del daño.

Los cambios que sufrió la naturaleza de la relación comercial entre México y Estados Unidos en 1985 fueron mucho más lejos que el acuerdo en torno a los subsidios —que en sí mismo resultó ser un paso histórico— pues fue al final de ese año que el presidente mexicano ordenó que se iniciaran las negociaciones para que México ingresara al GATT. Se trató de una decisión muy controvertida, especialmente por el hecho de que desde hacía tiempo Estados Unidos había buscado que México aceptara enmarcar en el GATT la relación comercial entre los dos países. El viejo proyecto mexicano de industrializarse a base de la sustitución de importaciones —es decir, en base al mercado interno—, y que le había llevado sistemáticamente a rechazar la destrucción de las barreras tarifarias que supone el ingreso al GATT, parecía haber sido desechado. La crisis de la economía mexicana llevó a las autoridades a iniciar un cambio sustancial en la estrategia del desarrollo mexicano. De esta manera, un objetivo de la administración de Miguel de la Madrid fue el dejar sentadas las bases para que México se transformara en un país capaz de exportar manufacturas con un alto contenido de mano de obra —su recurso abundante— a la manera de Taiwán o Corea del Sur.

Al finalizar 1985, la discusión pública con relación al ingreso de México al GATT y todo lo que ello significaría en el corto plazo —la destrucción de una parte de la planta industrial por ineficiente— y en el largo —una liga

mucho más estrecha al mercado estadounidense, destino inevitable del grueso de las futuras exportaciones—, era uno de los temas centrales del debate político interno mexicano.

La inversión extranjera directa fue también foco de atención y de discusiones encendidas en 1985, sobre todo en el caso de la industria farmacéutica y de computadoras. En realidad, el arreglo entre México y Estados Unidos en torno a los subsidios se retrasó porque México quería poner en práctica una legislación que obligaría a los productores de medicamentos a hacer del dominio público la naturaleza de sus fórmulas. Las empresas farmacéuticas, básicamente subsidiarias de consorcios extranjeros, se opusieron a la medida por considerar que sus derechos de patente estaban sin salvaguarda. Por lo que hace a las computadoras, la International Business Machines (IBM) pidió a México la aprobación de un proyecto de inversión en donde la empresa tendría el control total. Otras empresas competidoras protestaron, pues a ellas se les había obligado a asociarse con capital nacional como condición de su ingreso al mercado mexicano.

En la prensa especializada, así como en declaraciones de empresarios e incluso funcionarios de Estados Unidos las demandas de los laboratorios farmacéuticos y de la IBM se presentaron como casos simbólicos cuya solución expresaría la verdadera voluntad y capacidad del gobierno mexicano para mantener o variar su política respecto a la inversión directa extranjera. Al final de cuentas la ley se modificó en el sentido deseado por los laboratorios y el proyecto de la IBM fue aprobado, ambas decisiones fueron interpretadas por la mayoría de los observadores como un esfuerzo del gobierno por revitalizar la inversión externa directa; el logro de tal objetivo era aún una interrogante al concluir 1985.

Lo inesperado

El sismo que afectó a la ciudad de México y a varias otras poblaciones al occidente de la capital, causó daños de una magnitud tal que el gobierno y la sociedad mexicanos no lograron reunir de inmediato los recursos necesarios para hacer frente de manera adecuada a la emergencia.

Las noticias en torno a la catástrofe se difundieron por todo el orbe. La prensa y la televisión estadounidenses transmitieron a su público escenas dramáticas y conmovedoras. El gobierno de Estados Unidos —como muchos otros— ofreció de inmediato ayuda. Las autoridades mexicanas titubearon pero finalmente la aceptaron. La ayuda llegó de un buen número de países pero, obviamente, la cercanía y los recursos de Estados Unidos se hicieron presentes de inmediato. El embajador apareció en algunas de las zonas más dañadas de la capital e incluso se convirtió en una fuente de información que no tardó en entrar en contradicción con las oficiales, pues estas últimas tendieron a minimizar la magnitud del desastre.

La esposa del presidente de los Estados Unidos, Nancy Reagan, viajó a México para expresar oficialmente la solidaridad de su gobierno con las víctimas, a la vez que para entregar un donativo simbólico —un millón de dólares— para el programa de reconstrucción. En conjunto, la ayuda oficial

de Estados Unidos se valuó en cincuenta millones de dólares. Al lado de este aspecto oficial de la relación, destacó la contribución de miles de ciudadanos estadounidenses para la creación de fondos privados que reunieron y enviaron a México por los canales más diversos, dinero y materiales para atender las necesidades inmediatas de los damnificados. En México, las autoridades pusieron un empeño especial en dejar claramente establecido que la ayuda externa sería administrada con honestidad, pues lo último que se deseaba en México era que la ayuda se transformara en un elemento más de mala imagen internacional para el gobierno mexicano.

El significado

El año de 1985 en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos no fue testigo de ningún cambio inesperado o de naturaleza tan nueva que modificara el carácter anterior de la relación. Sin embargo, tampoco se trató de un año que vaya a pasar desapercibido en los anales de la relación entre ambos países, al menos no desde el punto de vista mexicano.

El problema de las drogas, aunado al de la seguridad de los turistas estadounidenses en México, aunque importante en sí mismo, rebasó su ámbito natural y, por un momento, se transformó en instrumento que sirvió a ciertas autoridades de Estados Unidos para presionar a México, al poner de relieve las diferencias en la naturaleza no sólo de los sistemas policíacos y de justicia así como de gobierno de los dos países, sino incluso de las dos sociedades. El objetivo aparente fue obligar al gobierno mexicano a hacer más efectiva su campaña contra las drogas y aumentar la seguridad de los viajeros, pero a un nivel más profundo, la situación sirvió para restar legitimidad a ciertas posiciones internacionales de México, en particular a aquellas que se oponen a las acciones encaminadas a reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en América Latina —particularmente en el Caribe y Centroamérica—, como parte de un proyecto global de redefinición de la estructura mundial del poder.

A mediados de año, y también sólo por un momento, la naturaleza de los procesos políticos internos —en particular la pérdida de legitimidad y de credibilidad en el sistema— pareció volverse parte de la agenda bilateral entre México y su poderoso vecino del norte, una agenda no oficial pero real. A todos quedó claro entonces que la estabilidad política mexicana era asunto que, a querer que no, interesaba a los Estados Unidos. En 1985 este tema hizo su aparición más como un problema potencial que como un factor determinante en la relación entre los dos países.

Problemas como los anteriores parecieron quedar aislados por un compartimiento estanco de otro tema que también afectó a la relación de México con Estados Unidos: el de la deuda externa mexicana. La liga de la crisis del modelo económico mexicano con la estabilidad política y con la capacidad de México para pagar su deuda externa y no afectar la salud del sistema financiero de Estados Unidos y del mundo occidental, llevó a que Estados Unidos no aprovechara la debilidad económica de su vecino del sur para presionarlo de la misma forma como lo había hecho con relación a los

otros problemas ya mencionados. Las dificultades económicas de México resultaron potencialmente muy peligrosas para los intereses de Estados Unidos, de ahí el deseo de Washington de no agudizarlas.

El año de 1985 también fue importante porque en él se hicieron patentes los esfuerzos del gobierno mexicano por echar las bases de un nuevo modelo económico que lleve a México en el mediano plazo a centrar su crecimiento más en su capacidad de exportación de manufacturas y menos en la producción para el mercado interno. La determinación del gobierno de ingresar al GATT, puso a México a tono con una vieja política comercial de los Estados Unidos que favorece tarifas arancelarias bajas y un mayor juego de las fuerzas del mercado como determinante de los intercambios comerciales internacionales. Al concluir 1985 era difícil predecir si esta nueva estrategia tenía posibilidades de sacar a México de su crisis y en qué medida Estados Unidos se encontraba dispuesto a auxiliar a su vecino del sur. Esto es, a no ponerle obstáculos sino más bien facilitarle la transición al nuevo modelo económico de apertura de su mercado y a otorgarle condiciones más favorables para cumplir con el pago de la deuda evitando el escenario extremo de una moratoria. La agudización de las tendencias negativas del mercado petrolero a fines de 1985 complicaron aún más este difícil panorama.

Finalmente, es necesario mencionar algunos de los temas que no fueron fuente de tensión y conflicto entre México y Estados Unidos, aunque tienen el potencial para serlo. En primer lugar, destaca el tema de los trabajadores indocumentados de México en Estados Unidos. En 1985 no se dio forma a ninguna legislación especial al respecto en Estados Unidos, aunque el Senado sí dio su aprobación a un marco legal que haga más difícil la presencia de los trabajadores mexicanos indocumentados siguen presionando en ese sentido. Mientras tanto, el número de mexicanos deportados por el Servicio de Inmigración y Naturalización aumentó respecto de los años anteriores. Los problemas de uso de recursos naturales compartido en la región fronteriza siguieron esperando su incorporación a un marco general de negociación entre los dos países. Las diferencias en torno a los derechos de pesca continuaron sin resolverse y el embargo contra el atún mexicano se mantuvo vigente. Sin embargo, en los casos mencionados y en otros similares, existió la conciencia en México de que eran temas que tarde o temprano se incorporarán a la agenda formal de la relación con Estados Unidos.